

orden, libertad y bien común

LA Argentina ha entrado con confiada expectativa en una nueva era de institucionalización democrática. La proclamación del Poder Ejecutivo electo ha permitido considerar como finalizado, en sus partes esenciales, un período caracterizado por la incertidumbre y las tensiones.

El primer protagonista de este cambio ha sido el mismo pueblo que con "sensatez y concordancia" ha preferido confiar en la ley y en el futuro del propio país votando en un porcentaje muy elevado en forma positiva. Se ha superado así el clima de escepticismo político y se ha vuelto a poner en manos de los dirigentes la grave responsabilidad de no defraudar a quienes han confiado en encontrar sus soluciones a través de la ley.

Dos deberes aparecen claramente ante los dirigentes políticos. Para los actuales, el no comprometer la acción futura por medidas que serían de difícil remoción en una próxima revisión de todas sus decisiones; para los ya electos, presentar un programa concreto que dé las garantías suficientes acerca de su labor, especialmente en el campo social.

Para todo el país y, en especial, para quienes naturalmente son sus dirigentes en las distintas activida-

des, existe el deber de prolongar este primer acto de confianza en la ley y sus consecuencias. Como con acierto señala el Episcopado en su declaración del 10 de agosto próximo pasado: "El respeto a la ley y a nuestras instituciones es la garantía del orden, la tutela de la sana libertad y la salvaguardia del bien común". Solo por este camino progresará la Argentina en la decisión que ha tomado de asegurar la reconstrucción nacional.



El haber elegido la forma republicana y democrática de gobierno impone asimismo un estilo de vida que es necesario propagar y mantener en todas las actividades. Por lo mismo, función es del gobierno y de todos los dirigentes promover la participación activa y espontánea para asumir las propias responsabilidades, y establecer entre todos los sectores un diálogo de comprensión y de respeto mutuo.

La democracia es la forma que más exigencias plantea a todos los integrantes de una comunidad. En una monarquía o en una dictadura partidaria, como las modernas, el responsable del bien común es, o bien el monarca, o bien los miembros del partido; pero en una democracia son los integrantes de la comunidad quienes asumen una idéntica responsabilidad. Por eso el primer esfuerzo en ella consiste en formar un pueblo; es decir: una sociedad de personas libres, conscientes de su igual dignidad, de su personalidad, de sus derechos y deberes manifestados en el respeto a la libertad de los demás.

En nuestro país todavía no se ha logrado este presupuesto de la democracia. Todavía hay muchos sectores que consideran tener más derechos que otros y no están dispuestos a reconocer los de los demás. Todavía desde el gobierno no se respetan suficientemente la dignidad y la personalidad de todos los ciudadanos, como desgraciadamente lo demuestran la persistencia del estado de sitio y las detenciones y muertes inexplicables, especialmente de delegados gremiales. Todavía la libertad es más formal que real, ya que las condiciones económicas imponen a muchos de los argentinos modos de vida inhumanos creados por las mismas estructuras.

Porque la democracia no es un reconocimiento estático de un orden de igualdad, sino que exige de todos sus miembros un esfuerzo de solidaridad, para poner al servicio del bien común lo mejor de sus cualidades. El bien común aparece entonces como una pasión para todos aquellos que comprenden que su propia felicidad está ligada a la felicidad y prosperidad de los demás.

Si todos los ciudadanos asumen una especial responsabilidad en la democracia, los gobernantes, gerentes del bien común y detentadores del poder, no pueden abandonarse a la arbitrariedad o al favoritismo. Su función es asegurar la justicia distributiva y, para ello, aceptan los controles necesarios a cargo de la representación popular e impuestos por las leyes fundamentales. Si alguna preferencia pueden mostrar en el ejercicio de su autoridad, es con respecto a los más débiles.



Ante estos esfuerzos, propios del sistema democrático de gobierno, la Iglesia no tiene más que una posición de franco apoyo. Lo han recordado los señores Obispos para la Argentina cuando, en la declaración citada más arriba, abogan por la fraternidad, la libertad, la justicia social y la paz, y en forma más amplia lo ha hecho últimamente el Cardenal Cicognani al escribir a la última Semana Social francesa. La libertad que es verdaderamente democrática no defiende la libre salida al capricho, a los impulsos, al escándalo, sino que es la "conciencia de la responsabilidad, como deber personal ante Dios". Si alguna institución ha afirmado la igualdad de los hombres, es la Iglesia, que la proclama fundada no solamente en un común origen sino también en una común dignidad: todos los hombres hijos de Dios, llamados a la misma visión beatífica. En cuanto a la fraternidad, ninguna la ha fundamentado mejor que ella que sabe, por Revelación, que todos los hombres son hermanos en su Redentor, Cristo, que nos obliga a presentarnos ante El, en el juicio final, con las manos llenas de la ayuda que podamos haber prestado a nuestros prójimos más necesitados.

Para completar los principios de igualdad, libertad y fraternidad, la Iglesia nos recuerda el origen divino

de la autoridad y enseña, a los que la ejercen, que "su poder es limitado por los derechos de la conciencia y las exigencias del orden natural querido por Dios".



De este hecho surge la responsabilidad de toda la comunidad con respecto a la educación. Los padres de familia son los primeros responsables de que sus hijos alcancen una capacidad de juzgar que les permita, llegada la ocasión, ser ciudadanos conscientes. Pero la educación no termina en el ámbito de la familia, ni tampoco en el de la escuela. Hoy en día, la prensa y la propaganda son amplios medios no sólo de difusión comercial, sino especialmente de ideas e informaciones que pueden cambiar los modos de pensar. De aquí la necesidad de una prensa libre y leal, que trate de ser objetiva y cuyos principios y orientación sean conocidos por todos los lectores. Por otra parte, a través de la educación, los ciudadanos deben ser capaces de escuchar sin pasividad toda la gama de informaciones para poder reconocer la verdad allí donde realmente se encuentra.

El mismo Gobierno debe promover y mantener una información lo más completa posible acerca de sus propias actividades a fin de lograr un diálogo con sus ciudadanos. Puede afirmarse que este intercambio de información y consulta con los ciudadanos, este verdadero diálogo, constituye uno de los pilares y una de las características de la verdadera democracia.

Para facilitar este diálogo existen las asociaciones intermedias con las cuales el Gobierno debe mantener un intenso intercambio de opiniones. El Consejo Nacional Económico vendría a dar forma institucional a una necesidad típica de la democracia. Las decisiones últimas quedarán en manos del Gobierno, pero es de hombre prudente informarse y recibir los datos de quienes se encuentran en contacto más inmediato e íntimo con los problemas que, obrando según el principio de subsidiaridad, deberá resolver el Poder Ejecutivo.

Pero no basta que exista este diálogo para que ya tengamos una perfecta democracia. Es necesario que entre los mismos grupos intermedios y en su interior no se produzcan compartimientos estancos que impidan el

libre conocimiento de los problemas, ni barreras creadas por el egoísmo de grupo que es más fatal que el personal. Esto exige que los grupos tengan como mayor preocupación, no la de extender su potencia, sino la de servir a los verdaderos intereses de sus adheridos en el marco del bien común.

Aún dentro de la misma empresa económica es necesario lograr este ambiente dialogal. La empresa ha sido definida por Juan XXIII como una comunidad de personas. Y si bien las mayores decisiones deben corresponder a la dirección, no quiere esto decir que el jefe responsable pueda tomar estas opciones sin consultar a sus colaboradores, que son los que pueden darle el conocimiento más claro del caso concreto. Todos los que intervienen en el proceso productivo se sentirán entonces participando activamente, no como meros engranajes, sino verdaderamente como personas que con su trabajo cumplen una misión encargada por Dios y un servicio a todos sus hermanos. Esta actitud exige de los jefes de empresa deseos de informarse, de iluminarse, de escuchar con interés una útil sugerencia, y de todos los colaboradores la voluntad de aportar algo útil a través de sus representantes libremente elegidos.

De esta manra se pondrán las bases de una democracia económica y social como una realidad henchida de riquezas y no como una fórmula vana.



La democracia se encuentra hoy entre dos movimientos que pueden aparecer antagónicos: el de personalización y el de socialización.

La socialización se entiende "como un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como institucionalización jurídica" (Juan XXIII). Tiene como una de sus causas la creciente intervención de los poderes públicos en vastos sectores de la actividad nacional y puede, por lo tanto, conducir a crear ambientes que dificulten el que cada uno piense independientemente de los influjos externos; pero tal efecto no es fatal. ¿Cuál es la solución? El que los distintos grupos intermedios —toda clase de asociaciones como coopera-

tivas, sindicatos, empresas— adquieran cada vez más profundamente la forma y sustancia de verdaderas comunidades; es decir, que en ellas los miembros sean considerados y tratados como personas. Y cada una de las personas asuma su parte de responsabilidad en la elaboración de un objetivo común. La corrección de los defectos de la socialización corresponde a la personalización; como, asimismo, los defectos de la personalización, que se concretan en el individualismo, son borrados por la socialización. Esta armonía entre dos movimientos, que en un primer momento aparecen como antagónicos, sólo puede realizarse en un ambiente de verdadera democracia.

El movimiento de personalización da a todos los miembros de una comunidad el desarrollarse de acuerdo con la propia esencia inteligente y libre, dejando bien en claro que la sociedad está ordenada para la persona, y no al contrario. En virtud del movimiento de socialización, el organismo social logra su fin que es fomentar el conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen aquel desarrollo integral de la persona humana que constituye el llamado “bien común temporal”. La teología católica ve en esta realización como una prefigura y al mismo tiempo una preparación, para todos los hombres salvados en Cristo, de aquella “sociedad de santos”, a la que está destinado el Cuerpo Místico de Jesús.

En el orden político, la coordinación entre la socialización y la personalización se realiza cada vez más “con el equilibrio renovado entre una exigencia de colaboración autónoma y activa de todos los individuos y grupos, y una acción oportuna de coordinación y de dirección por parte del poder público”.

Así surgen las características de una auténtica democracia que la Iglesia aprueba, y que no se encuentra relacionada necesariamente con un régimen político sino con estructuras de las que dependen las relaciones entre el pueblo y el gobierno, en la búsqueda de la prosperidad común. Todo régimen que no sea totalitario, es decir, en el que el gobierno es controlable por el pueblo, ya sea en su totalidad o a través de sus representantes, puede ser un sistema democrático.

Lo fundamental es que exista un equilibrio entre la representación popular y la iniciativa de los gobernantes. Ese equilibrio puede ser diverso en los grados de iniciativa por ambas partes. En nuestro país, como se sabe, el Gobierno posee un grado elevado de autonomía e iniciativa, lo que compromete mucho más su responsabilidad en la marcha general del país. El pueblo argentino confía, quizás con exceso, en las disposiciones que provienen de arriba; por eso su tendencia a aceptar gobiernos fuertes y justificar con cierta facilidad los excesos de poder. Las últimas elecciones constituirían, sin embargo, una reacción contra tal tendencia, y bueno será asegurarla desde el principio.

La democracia necesita asimismo la existencia de cuerpos intermedios libremente constituidos, con una legislación que los reconozca y proteja contra las arbitrariedades del mismo gobierno. Entre nosotros la suerte de tales instituciones ha estado siempre bajo la amenaza de intervenciones, aun policiales, que han impedido el desarrollo pleno de las mismas. El Gobierno, al reconocer su existencia, las debe emplear como normales consultores en las cuestiones de su competencia. Para poder cumplir esta función los cuerpos intermedios deben proponerse no sólo su propio desarrollo, sino el bienestar general.



Pero en la democracia el pueblo es el principal actor. Para poder cumplir con su función electoral es necesario que esté informado lealmente, a fin de juzgar con acierto de la política de sus mandatarios y lo que le proponen sus candidatos. Este es uno de los puntos en los que el pueblo argentino tiene más derechos de queja y que es necesario rectificar para asegurar el sistema democrático.

Una democracia se prueba especialmente por la existencia de derechos y deberes eficazmente protegidos en su ejercicio. De aquí que medidas en contra de los mismos, o de suspensión, crean un ambiente de desconfianza contra la democracia y facilitan la propaganda de las ideas comunistas. Si la democracia no puede ofrecer más que una libertad formal, es indudable que atrae

rá a los espíritus la posibilidad de probar otros tipos de convivencia humana.

El ejercicio de los deberes y derechos exige la existencia de un poder judicial independiente e imparcial. Su actuación perfecta depende no sólo de la conciencia personal de los jueces, sino también de que los poderes coactivos respeten la fuerza moral de las leyes y las sentencias. El futuro gobierno demostrará su espíritu democrático si asegura el ejercicio pleno del poder judicial. En nuestro país podrá colocarse en un alto lugar en la historia a aquel mandatario que ponga como divisa de su período el cumplimiento exacto de las leyes y el respeto a las decisiones judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos.



Así se demuestra que la democracia es una forma de gobierno y un sistema particularmente apto para el pleno desarrollo de la persona humana en el que los pueblos pueden encontrar la solución a sus fundamentales problemas sociales y económicos. El primero de los peligros que amenaza a América Latina es este desencanto con respecto a una democracia que hasta ahora ha aparecido como el sistema propio para mantener a los pueblos en la indigencia o en el atraso. La responsabilidad argentina en este aspecto es muy grave y debemos confiar en que el período que se inicia pueda contribuir a señalar que el país ha comprendido su misión.

El espíritu cristiano posee especial aptitud para comprender tal sistema, y fuerza para mejorarlo. Su orientación hacia Dios hace a los cristianos particularmente sensibles a la verdad, a la justicia y al amor, virtudes eminentemente sociales. Por lo mismo Juan XXIII y Pablo VI no dejan de alentar todos los esfuerzos para infundir en este mundo moderno los más altos ideales católicos. No se puede desoír lo que constituye un verdadero mandato. "Exhortamos de nuevo a Nuestros hijos a que participen activamente en la vida pública y política y cooperen al fomento de la prosperidad de todo el género humano y de su propia nación". Juan XXIII señala así la misión de los cristianos. Esta

misión no puede cumplirse si no es a través de la competencia técnica. No bastan las luces de la fe, ni una ardiente voluntad de promover el bien; es preciso un conocimiento interno de las instituciones sociales para poder ejercer un verdadero influjo en las estructuras.

Pero tampoco basta la competencia técnica para implantar la verdad como fundamento de las relaciones sociales, la justicia como norma, el amor mutuo como motor y la libertad como clima. Tres pasos son necesarios para lograr tal finalidad:

En primer lugar, en las actividades temporales, observar las leyes propias de cada campo y adoptar sus métodos propios;

Luego, conformar las propias acciones con los preceptos morales y, por lo tanto, comportarse como sujetos que ejercen sus derechos, cumplen sus deberes y realizan un servicio;

Por último es necesario desarrollar la propia actividad como una respuesta fiel a los designios providenciales de Dios, como una colaboración a su obra creadora y como un aporte personal a la realización del plan divino en la historia.

Los católicos argentinos han dado pruebas de comprender sus obligaciones en el campo político y social, pero, en cada momento de la historia, están llamados a realizar nuevos esfuerzos tendientes a armonizar las exigencias cotidianas con los principios de su cristianismo. Es esta una tarea que nunca puede darse como concluida y que exige de todos perseverancia e imaginación.

Para el nuevo período que se inicia los católicos deben sentir más que nunca su compromiso con el país y con sus principios. De ellos depende que el esfuerzo total de la Nación no quede a medio camino, sino que se oriente decisivamente hacia Dios, Señor de los pueblos y las naciones.

La Dirección